114

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Resolución Alcance Particular

Número: RESAP-2023-98-APN-UIF#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 2 de Junio de 2023

Referencia: EXPTE. UIF N° 1323/2017 – ESCRIBANO CORNET ROBERTO ALEJANDRO S/INCUMPLIMIENTO RES. UIF N° 50/2011 Y MODIFICATORIAS

VISTO el Expediente N° 1323/2017 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, Organismo con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del MINISTERIO DE ECONOMÍA, la Ley N.° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N.° 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, y las Resoluciones UIF Nros. 21 del 18 de enero de 2011, 50 del 31 de marzo de 2011, 111 del 14 de junio de 2012, y sus respectivas modificatorias, y 89 del 3 de mayo de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 20 inciso 12 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias incorpora como Sujetos Obligados y les impone el deber de informar a esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) -en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley- a los Escribanos Públicos.

Que en lo que se refiere específicamente al alcance de ese deber de informar, corresponde considerar las previsiones de los artículos 20 bis y 21 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y a lo dispuesto en la Resolución UIF N° 21/2011 y sus modificatorias.

Que la Resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias, establece los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias deben registrarse ante esta UIF.

Que mediante la Resolución UIF N° 89, del 3 de mayo de 2018, se ordenó el inicio de un sumario al escribano público Roberto Alejandro CORNET (CUIT N° 20-18090875-8), por haber incumplido *prima facie* con el deber de registrarse como Sujeto Obligado conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias (fs. 28/33).

Que asumida la Instrucción el 7 de junio de 2018, se procedió a agregar la constancia de consulta efectuada al Sistema de Reporte de Operaciones (SRO), donde surge que el escribano Roberto Alejandro CORNET (CUIT N° 20-18090875-8), se registró en el referido sistema en fecha 4 de junio de 2018 (fs. 37).

Que el 7 de junio de 2018 el instructor sumariante dispuso citar en calidad de sumariado al escribano

mencionado, para que en el plazo de quince (15) días hábiles administrativos presentara descargo, tomara vista, ofreciera prueba, y asimismo, prestara declaración en carácter de sumariado el día 23 de julio de 2018 a las 10:30 horas, en la sede de la UIF (fs. 38 y 38 vta).

Que el 18 de julio de 2018 se agregó la pieza devuelta por el correo argentino identificada alfanuméricamente como EC729360225, con motivo de la devolución "cerrado/ausente".

Que la Instrucción ordenó librar oficio a la Excma. Cámara Nacional Electoral, a fin de que informe el último domicilio que registra el escribano sumariado, y dispuso dejar sin efecto la audiencia fijada para el día 23 de julio de 2018 (fs. 42).

Que a fs. 46 la Excma. Cámara Nacional Electoral informó que el último domicilio registrado del escribano sumariado es el sito en la calle Córdoba 141, capital, Santiago del Estero.

Que el 2 de agosto de 2018, la Instrucción ordenó efectuar y agregar consulta al RENAPER a fin de verificar el domicilio del escribano sumariado (fs. 44), notificar el proveído de fecha 7 de junio de 2018 obrante a fs., 38 y 38 vta., al domicilio sito en la calle Córdoba 141, capital, Santiago del Estero que surge de la constancia del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) –en consonancia con el domicilio informado por la Cámara Electoral- citar al sumariado a comparecer a la sede de la UIF el día 24 de septiembre de 2018, a las 11:00 hs. (fs. [illegible] notificado a fs. 48 y 50 en fecha 16 de agosto de 2018).

Que el Sumariado presentó su descargo en tiempo y forma (fs. 51/55).

Que en su descargo reconoció no haberse registrado ante esta UIF dentro del plazo previsto en la Resolución UIF N° 50/2011, y manifestó haber dado cumplimiento a tal obligación en fecha 4 de junio de 2018 según la constancia acompañada como prueba (fs. 54).

Que en lo que se refiere a las defensas esgrimidas, alegó que la obligación legal de registración fue incorporada en el texto de la Ley N° 25.246 mediante el artículo 13 de la Ley 27.446 (B.O. 18/6/18), que introdujo el artículo 21 bis cuyo apartado 2 inciso a) impone a los Sujetos Obligados el deber de registrarse ante la UIF y dicha incorporación, es de vigencia posterior al inicio del Sumario.

Que, en relación a ello, tal como sostuvo la Instrucción, que cabe tener presente que si bien la obligación de registración del sujeto obligado ante la UIF fue receptada en el texto de la Ley N° 25.246 a través de la reforma introducida por la Ley N° 27.446, esa obligación ya se encontraba expresamente establecida a través de Resolución UIF N° 50/2011, publicada en el Boletín Oficial el 1 de abril de 2011, en virtud de lo cual dicho argumento defensivo también debe rechazarse.

Que, adicionalmente, el Sumariado manifestó que la UIF no se encuentra facultada para reglamentar la Ley, ya que la delegación establecida en el artículo 21 de la Ley N° 25.246, que la habilita a establecer pautas objetivas, modalidades, oportunidades y límites del cumplimiento de esta obligación, "no resultaría suficientemente habilitante para validar la aplicación de sanciones por la vía de la potestad reglamentaria delegada por la propia Ley".

Que frente a dicho planteo, corresponde destacar que en nuestro sistema jurídico el control de constitucionalidad de las Leyes (tanto formales como materiales) es de carácter difuso jurisdiccional, lo que implica que dicho control se realiza exclusivamente dentro de la esfera del Poder Judicial. Por lo tanto la UIF, como órgano descentralizado de la Administración Pública, carece de facultades para pronunciarse sobre el planteo de

inconstitucionalidad incoado por la Sumariada.

Que, en tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante "CSJN") ha dicho que: "En este sentido es claro que, cualesquiera sean las facultades que corresponde reconocer al poder administrador para dejar sin efecto actos contrarios a las Leyes, no cabe –sin embargo- admitir que sea de su resorte declarar la inconstitucionalidad de éstas. Ello así, porque aceptar semejante tesis importaría desconocer que el Poder Judicial es, en última instancia, el único habilitado para juzgar la validez de las normas dictadas por lo órgano legislativo..." (Fallos 269:243).

Que el sumariado argumentó que la UIF no se encontraba facultada para reglamentar la ley, dado que la ley no prevé pautas objetivas que habiliten para validar la aplicación de sanciones por la vía de la potestad reglamentaria delegada por la propia ley.

Que agregó que si la UIF obra como juez administrativo -al sustanciar el proceso de determinación de una sanción y al aplicar la misma- y a la vez resulta beneficiaria de lo que recauda por multas, resulta ser parte interesada; lo cual es incompatible con la naturaleza de juez imparcial y solicitó la eximición de toda sanción por tratarse, a su entender, del incumplimiento de una obligación meramente formal.

Que el 29 de octubre de 2019, la Instrucción dispuso efectuar consulta al SRO a fin de verificar los datos de registración del Sujeto Obligado, y librar oficio al Colegio de Escribanos de la Provincia de Santiago del Estero para que informe la fecha de inicio de la actividad del escribano sumariado, si tiene inhabilitaciones, y en qué carácter realiza la función notarial -titular/adscripto.

Que el Colegio Notarial de Santiago del Estero informó que el escribano Roberto Alejandro CORNET (DNI N° 18.090.857), comenzó su actividad notarial el 9 de mayo de 1996, como Notario Adscripto al Registro N° 5 de esa ciudad, y que no posee sanciones disciplinarias.

Que se constató que el escribano sumariado Roberto A. CORNET se registró ante esta UIF el día 4 de junio de 2018, y el escribano titular del registro donde el sumariado se desempeñaba como adscripto se registró en fecha 18 de julio de 2011 y adeudaba el envío de los RSM detallados a fs. 66/67.

Que, posteriormente, al momento de alegar, el sumariado reafirmó lo dicho en su descargo.

Que previa certificación del cumplimiento formal de la totalidad de las etapas del procedimiento sumarial, la Instrucción elaboró su Informe Final, de conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Resolución UIF N° 111/2012, en el cual concluyó que correspondía la aplicación al sumariado de una sanción de multa de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), por haber tenido por acreditado el incumplimiento del artículo 2° de la Resolución UIF N° 50/2011.

Que para llegar a dicha conclusión, la Instrucción destacó que la Resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias establece en el artículo 2° que los Sujetos Obligados debían registrarse entre el 1° y el 30 de abril de 2011 y, por otro lado, el artículo 3° dispone que, en el caso que un Sujeto Obligado inicie su actividad con posterioridad a esas fechas, deberá efectuar la registración dentro del día 1° al 30 del mes de inicio.

Que la Instrucción tuvo por acreditado que al 29 de enero de 2018 el escribano sumariado, quien ejerce la función notarial en carácter de adscripto del registro notarial N° 5 desde mayo de 1996, no se encontraba registrado como sujeto obligado ante esta UIF, según surge de la constancia de la consulta efectuada al SRO obrante a fs. 14 y del informe técnico de la Dirección de Supervisión de fs. 15, debiendo haberse registrado como Sujeto Obligado

como plazo máximo el día 30 de abril de 2011.

Que la normativa establece claramente la obligación de registración ante la UIF de todos los Sujetos Obligados y, en consecuencia, de todos los escribanos, sin distinción entre escribanos titulares y adscriptos.

Que consecuentemente, ha quedado acreditado que el sumariado ejercía la función notarial y que, por ende, debió registrarse ante esta UIF.

Que la Instrucción consideró que dicho incumplimiento persistió durante un período de más de siete (7) años, hasta el día 4 de junio de 2018, atento a que el escribano procedió a registrarse el día 4 de junio de 2018 (fs. 57 y 64).

Que en el descargo planteado por el sumariado, reconoció no haber cumplido oportunamente con la registración según el plazo que establecía la norma.

Que en cuanto a la alegación de no haber incumplido ninguna de las obligaciones sustanciales previstas en la ley, sino una obligación meramente formal; la Instrucción sostuvo -por el contrario- que la falta de registración es una infracción que reviste especial relevancia, debido a que la misma impide, en principio, el cumplimiento de otras obligaciones establecidas en la normativa aplicable como el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), entre otras cuestiones.

Que la Instrucción destacó que el incumplimiento imputado dificulta el ejercicio de la atribución fiscalizadora de esta UIF y genera, por otra parte, una situación de desigualdad respecto de otros Sujetos Obligados que procedieron a registrarse en tiempo y forma.

Que en cuanto a la alegada imparcialidad de la UIF como tribunal administrativo, por ser beneficiaria de lo recaudado en concepto de multas, sostuvo la Instrucción que la circunstancia de que el producido de las multas impuestas por la Unidad sea asignado por ley a la UIF no afecta en modo alguno la imparcialidad del organismo en su rol de investigación.

Que la Instrucción concluyó que la falta de registración del escribano sumariado en el SRO ha quedado acreditada, y que ello configuró una infracción a lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución UIF N° 50/2011, resultando en consecuencia responsable del cargo imputado, a tenor de lo prescripto en el inciso 1 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y modificatorias.

Que el aspecto procedimental de este sumario fue regido por la Resolución UIF N° 111/2012 por ser la normativa que se encontraba vigente al momento en que se resolvió iniciar estas actuaciones sumariales.

Que tal como se verifica de acuerdo a las constancias que surgen de estas actuaciones, el procedimiento se ha desarrollado en el marco establecido por la normativa señalada precedentemente.

Que el procedimiento sumarial adoptado por la Resolución UIF antes mencionada garantiza el pleno ejercicio del debido proceso adjetivo, consagrado por el inciso 8 del artículo 14 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y el artículo 1° inciso f) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en tanto prevé el derecho de los sumariados a presentar sus descargos, a ofrecer y producir prueba, a alegar, a obtener una resolución administrativa que ponga fin al procedimiento sumarial y a, eventualmente, solicitar la revisión judicial de ese decisorio administrativo.

Que lo actuado por la Instrucción, tanto en lo que hace al procedimiento seguido para la comprobación del presunto incumplimiento que formó el cargo que motivó estas actuaciones, como así también para sugerir las absoluciones, se encuadra en el ejercicio de su competencia específica de acuerdo a lo que dispone la normativa en la materia (Resoluciones UIF Nros. 111/2012 y 152/2016).

Que la finalidad de las sanciones administrativas es, junto con el reproche concreto por el incumplimiento constatado, la prevención y disuasión de conductas contrarias al ordenamiento jurídico, evitando la reiteración de incumplimientos por parte de los sumariados y la vigencia y efectividad de las normas de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLA/FT) para el resto de los actores del sistema.

Que debe tenerse presente que las sanciones impuestas por esta Unidad *"...como parte del derecho administrativo sancionador, tienen una naturaleza preventiva y por tanto no participan de la naturaleza de las medidas represivas propias del derecho penal (Fallos:330:1855, "Comisión Nacional de Valores c/ Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/ transferencia paquete accionario a Nabisco"; Sala II, causas "Emebur", citada, y "Banco Macro SA y otros c/ UIF s/ Código Penal –Ley 25.246 –Dto. 290/07 Art. 25", pronunciamiento del 21 de abril de 20154). Con esa orientación, en la doctrina se ha dicho, incluso, que la expresión "pena" contenida en el artículo 24, inciso 1°, de la ley debe interpretarse como sinónimo de "sanción" (Francisco J. D'Albora (h), "Lavado de dinero y régimen penal administrativo", La Ley 2003C1272). Es por ello que no puede convalidarse, en este ámbito, la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por las normas específicas (Fallos: 330:1855). La circunstancia de que en la ley 25.246 se hace referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal no tiene, por las razones apuntadas, la aptitud para modificar las conclusiones expuestas, en tanto las consecuencias o reproches por las infracciones, esto es las sanciones, no trascienden de la esfera del derecho administrativo sancionador (Sala II, causa "Emebur", citada)"* (CNACAF, Sala I, "Banco de Galicia y Buenos Aires SA y otros c/ UIF – resol. 36/10 (Expte. 68/10)" del 24/05/2016 y "Banco Supervielle SA c/ UIF s/ Código Penal – ley 25.246 – dto. 290/07 art. 25" del 20/09/2016).

Que, *"...en cuanto a la naturaleza de las multas aplicadas y la consecuente aplicación de los principios que rigen en el derecho penal, debe señalarse que las sanciones aplicadas en autos por la Unidad de Información Financiera tienen naturaleza administrativa y no son otra cosa que la consecuencia del ejercicio del poder de policía por parte de quien fue oportunamente designado por el Congreso de la Nación al efecto (conf. artículos 5 y 6 de la ley 25.246). Es que los castigos que impone la autoridad de aplicación en cumplimiento de los deberes que le fueron encomendados tienen carácter disciplinario y no participan de la naturaleza de las medidas represivas contempladas en el Código Penal de la Nación; por ende, no es de su esencia que se apliquen las reglas del derecho penal. Precísese que los castigos que se imponen como consecuencia de la inobservancia de las prescripciones contenidas en las normas que conforman el plexo normativo bajo examen (...) constituyen infracciones administrativas; respecto de las cuales no puede convalidarse la aplicación indiscriminada de los principios que rigen en materia penal, teniendo en cuenta las particularidades del bien jurídico protegido por la normativa específica, lo que se ve reafirmado por la naturaleza preventiva del derecho administrativo sancionador, por contraposición con la represiva del derecho penal (conf. -en este sentido- dictamen de la Procuración General de la Nación, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en autos: "Comisión Nacional de Valores c/Establecimiento Modelo Terrabusi S.A. s/transferencia paquete accionario a Nabisco", el 24/4/2007, registrado en Fallos: 330:1.855). (...) Desde esta perspectiva, deviene improcedente la pretendida asimilación del especial régimen aplicable en la materia de autos con el derecho penal, en cuanto resulta claro que la sanción de multa es de naturaleza administrativa y no penal; lo que en nada obsta al debido resguardo de la defensa en juicio y la plena vigencia de las garantías propias del procedimiento*

sumarial -que se encuentra previsto en la resolución U.I.F. N° 111/2012-, pero sí impide una traslación acrítica y en bloque de la normativa propia de la materia criminal. En consonancia con lo argumentado, resáltese que en el decreto N° 290/2007, reglamentario de la ley 25.246, se dispuso la aplicación, en lo pertinente, de las normas de la ley 19.549 y modificatorias, su decreto reglamentario y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin referencia alguna al Código Penal de la Nación ni su código de rito. Y en nada modifica lo hasta aquí sostenido el hecho que a lo largo del articulado de la ley 25.246 haya referencias a figuras y delitos contemplados en el Código Penal de la Nación, pues tal como se desprende de lo hasta aquí señalado, el régimen bajo examen tiene por objeto evitar la comisión de los ilícitos ya señalados, a cuyos efectos se establecieron obligaciones a cargo de los denominados Sujetos Obligados, cuya inobservancia trae aparejada la aplicación de castigos que, como se viene explicando, no trascienden de la esfera del derecho sancionador administrativo. Lo expuesto lleva a desestimar sin más toda argumentación formulada que tuviera sustento en la pretendida aplicación lisa y llana de los principios del derecho penal." (CNACAF, Sala II, "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Art. 25" del 14/08/2014, "Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Jujuy c/U.I.F. s/Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/2007 Art. 25" del 23/02/2016 y "Yecora, Fernando José y otros c/U.I.F. s/Código Penal - Ley 25.246 - Dto. 290/07 Art. 25" del 23/02/2016).

Que el marco normativo describe conductas de cumplimiento exigible y su inobservancia resulta punible sin evaluar si ha existido dolo, culpa o cualquier otra cuestión vinculada a algún factor de atribución subjetiv tampoco se evalúa la presencia de errores involuntarios y, menos aún, el desconocimiento de la legislación vigente.

Que al respecto, la jurisprudencia sostuvo también que *"...debe señalarse que basta con la falta de observancia de los recaudos analizados (...) para hacer nacer la responsabilidad de los sujetos involucrados, requiriéndose –para su configuración- simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la norma. Es que este tipo de infracciones (...) son de las denominadas formales. Se trata de aquellos ilícitos denominados de 'pura acción' u 'omisión', y, por tal motivo, su apreciación es objetiva (conf. esta Sala, in re 'Castex Propiedades S.A. c/ D.N.C.I.' del 28/2/2012; 'Aguas Danone de Argentina S.A. c/ D.N.C.I.' del 1/12/2009 y en autos 'Viajes Ati S.A. – Empresa de Viajes y Turismo c/ D.N.C.I.', del 13/3/2009; entre otros). Las normas legales imponen una conducta objetiva que debe ser respetada, bajo apercibimiento de las sanciones allí previstas, por manera que no es necesario advertir al particular (...) la irregularidad detectada en forma previa a instruir el procedimiento sumarial"* (CNACAF, Sala II, 14/08/2014 "Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros c/ U.I.F. s/ Código Penal – Ley 25.246 – Dto. 290/07 Artículo 25" del 14/08/2014 y "Banco Macro S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley N° 25.246 – Dto. 290/07 Artículo 25").

Que en el mismo orden de ideas se ha afirmado que *"...el 'Régimen Penal Administrativo' de la Ley N° 25.246 contiene, en rigor, normas propias del Derecho Administrativo Sancionador, en el cual los principios penales son aplicables, aunque con matices; esto es, no resulta factible la transposición automática de los principios y criterios del Derecho Penal (v. en tal sentido, Nieto, Alejandro, Derecho Administrativo Sancionador, Madrid, Tecnos, 2000, págs. 174 y ss.). En cuanto aquí interesa, la aplicación de sanciones a los recurrentes no importa prescindir del principio de culpabilidad, ya que el elemento intencional está presente, al menos a título de culpa o negligencia. Al respecto, observa Nieto que una peculiaridad de las normas administrativas sancionadoras, radica en que la culpabilidad puede configurarse a partir de la diligencia que resulta normalmente exigible a quienes desempeñan en forma habitual determinada actividad (op. cit., págs. 347/348). A ello se añade el carácter formal de las infracciones, en tanto no necesitan ir acompañadas de un resultado lesivo concreto, sino que se conectan a un mero incumplimiento, con independencia de la lesión que con él pueda eventualmente producirse (op. cit., págs. 349/352). Por ello, los incumplimientos sancionados se deben a omisiones o*

cumplimientos irregulares de obligaciones normativamente establecidas, que los recurrentes debieron conocer e impedir, actuando con la debida diligencia, a fin de no incurrir en las conductas que se les reprochan." (CNACAF, Sala V, "Hipódromo Argentino de Palermo S.A. y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25.246- Dto. 290/07 Art 25" del 21/05/2015).

Que este criterio ha sido reiterado por jurisprudencia del fuero al sostener que "*...la actividad desplegada por la sancionada se encuentra sometida al poder de policía ejercido por la Unidad de Información Financiera (...) que ha sido designado como el encargado del análisis, tratamiento y la transmisión de información a efectos de prevenir e impedir delitos vinculados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo (conf. art. 6, ley 25.246) y, conforme lo dispuesto en el capítulo IV del referido precepto, se encuentra facultada para reglamentar y sancionar –dentro de los límites contemplados en el referido precepto– la inobservancia de las pautas acordadas que hacen, básicamente, al cumplimiento de concretas obligaciones informativas a cargo de los "Sujetos Obligados...*" (CNACAF, Sala II, "Sergio Villella SA y otros c/ UIF s/ Código Penal – Ley 25246 – Dto. 290/07 art 25" (Expte. N.° 2342/2018, sentencia del 28 de agosto de 2018).

Que asimismo y sin perjuicio de las consideraciones vertidas en párrafos precedentes respecto del cargo que se ha tenido por acreditado, en lo que hace al monto de la multa sugerida por la Instrucción, debe tenerse presente resulta en un todo de acuerdo con la normativa aplicable al caso ya que respeta el tope mínimo y máximo fijado en el inciso 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que corresponde resaltar que es potestad propia y exclusiva de quien aquí suscribe, establecer el *quantum* de la multa a aplicar por el incumplimiento acreditado por la instrucción durante el procedimiento sumarial.

Que la máxima autoridad de la UIF podrá, con el margen fijado por la citada Ley, establecer el monto de las multas a aplicar por cada infracción detectada y acreditada; incluso, apartándose de las sugerencias efectuadas por el área con competencia específica, siempre que se respete la razonabilidad y proporcionalidad del monto a aplicar.

Que con relación al considerando anterior, en numerosas oportunidades se ha señalado que la determinación y graduación de la sanción es resorte primario de la autoridad administrativa, principio que solo cede ante una manifiesta arbitrariedad (v. 19/09/2017, CNACAF , Sala V; *Orbis Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ UIF s/Código Penal - Ley 25246 – DTO. 290/07 ART. 25*; 27/05/1997, CNACAF , Sala V; *Musso, Walter c/ Prefectura Naval Argentina;* 19/07/2006, CNACAF , Sala II, *Travaglia, José O. y otros c/ BCRA – Resolución N° 109/2012 – Expte. 100.045/94 Sum. Fin. N° 893*; entre otros).

Que el procedimiento administrativo que se despliegue a fines de efectivizar el régimen sancionatorio de la UIF debe asegurar la vigencia del principio de razonabilidad en el ejercicio de la potestad sancionatoria, manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que se deben tutelar, a fin de que respondan a lo necesario para la satisfacción de su cometido.

Que en virtud de los estándares del GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) - Recomendación N° 35-, resulta necesario que las sanciones impuestas a los Sujetos Obligados sean eficaces, proporcionales y disuasivas, y que a fin de dar cumplimiento con lo señalado precedentemente, esta UIF cuenta con un régimen sancionatorio tendiente a deslindar la responsabilidades respecto de incumplimientos constatados y penalizar las conductas contrarias a la legislación vigente.

Que el principio de proporcionalidad encierra una exigencia de ponderación guiada a que se corresponda la gravedad de la sanción con la del comportamiento de los sumariados y que la graduación de la sanción queda

librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación

Que resulta relevante enunciar cuáles son, en el caso objeto de análisis, los factores de ponderación que sirven de guía para una razonable cuantificación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que en ese sentido, se ponderó: (i) el carácter y naturaleza del incumplimiento imputado en esta instancia sumarial, siendo que la falta de registración ante esta UIF es una infracción que reviste especial importancia, debido a que la misma pone en desigualdad a los sujetos obligados que procedieron a registrarse en tiempo y forma, y puede acarrear incumplimientos a otras obligaciones en materia de PLA/FT; (ii) que el sumariado mantuvo el incumplimiento de su obligación de registración durante un lapso de más de siete (7) años.

Que, por otra parte, la Instrucción consideró que concurren en el caso una serie de elementos atenuantes, entre los que se destacan que: (i) el Sujeto Obligado es adscripto; (ii) procedió a registrarse ante esta UIF con fecha 4 de junio de 2018; y *(iii) e*ste Sumario es el primero que registra el escribano.

Que no resulta exigible una exacta correspondencia numérica entre la multa y la infracción cometida, sino que es suficiente que la autoridad de aplicación realice una apreciación razonable de los diferentes parámetros legales previstos y las circunstancias fácticas tenidas en cuenta para justificar la sanción (Fallo "Swiss Medical S.A. DNCI s/ defensa del consumidor - ley 24.240 art. 4", sentencia de la CNACAF, Sala V del 14.07.2015).

Que se ha pronunciado reiteradamente la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN (PTN) al indicar que *"...la graduación de la sanción queda librada a la prudente discrecionalidad de la autoridad de aplicación y por ello no es competencia de esta Casa abrir juicio acerca de ello..."* (Dictámenes PTN 133:113, 261:121, 293:144, 295:269, entre otros) y que *"...la determinación precisa del monto de la pena entre los límites mínimo y máximo establecidos por la ley constituye una facultad discrecional exclusiva de la autoridad con competencia para resolver..."* (Dictamen PTN 294:114).

Que toda facultad discrecional –como lo es la determinación del monto de la multa a aplicar- requiere la necesidad de una valoración subjetiva por parte de la Administración, al permitirle elegir entre una o más alternativas válidas, igualmente ajustadas desde la perspectiva del Derecho (cfr. GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNANDEZ, Tomás Ramón, *Curso de Derecho Administrativo*, t. I, p. 444, 8° ed., Civitas, Madrid, 1997).

Que se ha dicho que *un procedimiento sancionador será razonable si respeta el debido procedimiento adjeti en el marco del cual el administrado pueda ejercer debidamente y en forma previa su derecho de defensa, pudiendo alegar los fundamentos que hacen a su defensa, y valerse de las pruebas conducentes que permitan acreditar los argumentos que expone* (CASSAGNE, Ezequiel; El principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo; en AA.VV., Procedimiento Administrativo; T. I, La Ley, 2012, p. 681 y ss.).

Que es claro que el legislador ha establecido un margen de acción o elección para el ejercicio de la denominada discrecionalidad administrativa o arbitrio administrativo, así la adopción del monto, por parte de quien aquí suscribe, a partir del asesoramiento realizado por el área técnica o por el Consejo Asesor, en ejercicio de facultades discrecionales, deberá, siguiendo la tesis delineada por Fiorini, engarzarse con la función administrativa y, con los fines administrativos (conf. cita en Derecho Administrativo en transición, Juan G. Corvalán, pág. 76, Bs. As. Astrea, 2016).

Que, con relación a las funciones encomendadas a los escribanos públicos como Sujetos Obligados, corresponde

tener presente que *"... Dentro de esta relación de sujeción especial se atribuye razonablemente un rol preponderante a los escribanos en el sistema de prevención de lavado de activos a fin de superar la asimetría informativa entre el Estado y los operadores financieros. Sus conocimientos técnicos y experiencia profesional los ubica en una posición de privilegio frente al resto de la comunidad a la hora de indagar cuando una transacción tiene indicios de vinculación con el lavado de activos y la financiación del terrorismo..."* (CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (CSJN), "Colegio de Escribanos de la Provincia de Bs. As. c/ PEN s/ sumarísimo" del 4 de septiembre de 2018).

Que, en dicho precedente el Máximo Tribunal sostuvo, respecto del régimen informativo, que en consonancia con los estándares internacionales, se entiende que el cumplimiento de esas funciones en forma eficaz demanda la colaboración de los escribanos que además, cumplen una función de especial naturaleza al dar fe pública a los actos y contratos.

Que, respecto a la relevancia de cumplir con el deber de registración, la jurisprudencia ha dicho que *"... la registración de la totalidad de los sujetos obligados ante la UIF (www.uif.gov.ar) tiene por finalidad la identificación de aquellos y facilitar el contacto permanente y fluido. Asimismo, constituye un paso previo para la remisión de los reportes de operaciones sospechosas a través de internet (Considerandos de la resolución 50/11). Sobre dicha base, no resulta admisible el cuestionamiento de la sanción con fundamento en la falta de entidad de la infracción... (art. 24 de la ley 25.246)"* (Clariá, Horacio Enrique c/UIF s/CÓDIGO PENAL-LEY 25246 –DTO 290/07 ART. 25).

Que, con relación a la afectación al bien jurídico tutelado, la responsabilidad en la materia *sub examine* no requiere la existencia de un daño concreto derivado del comportamiento irregular, pues el interés público se ve afectado aún por el perjuicio potencial que aquél pudiere ocasionar.

Que, en este sentido, conforme se ha dicho en los autos caratulados "Cerviño, Guillermo A. y Otros c/ Banco Central de la República Argentina" (CNACAF, Sala II, 29/04/2008), *"La responsabilidad en la materia sub examine no requiere la existencia de un daño concreto derivado del comportamiento irregular (...) pues el interés público se ve afectado aun por el perjuicio potencial que aquel pudiere ocasionar (conf. Sala II, in re 'Banco Patagónico S.A.' del 17/10/1994 y esta sala, in re 'Banco Regional del Norte Argentino S.A.', del 6/4/1993) (...) resultando que tanto la existencia de dolo como el resultado, son indiferentes (conf. Sala 3°, in re 'Pérez Álvarez, Mario A.' del 4/7/1986) (...) a los efectos de la aplicación de sanciones, la falta de un efectivo daño a los intereses públicos y privados que el sistema legal tiende a preservar (conf. Sala 3°, in re 'Compañía Franco Suiza de Inversiones S.A.', del 7/10/1982)"*.

Que conforme se desprende del análisis del cargo, la infracción imputada en el marco del presente sumario ha generado una vulnerabilidad al sistema de PLA/FT del Sujeto Obligado.

Que se ha dado cumplimiento con la garantía de la tutela efectiva prescripta por los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Que en la tramitación de las presentes actuaciones se ha cumplido con el debido proceso adjetivo consagrado receptado por el inciso 8 del artículo 14, de la Ley N.° 25.246, y con el inciso f) del artículo 1°, de la Ley N.° 19.549, que establece en los procedimientos administrativos -entre ellos los sancionadores- la posibilidad de ser oído, ofrecer y producir prueba y obtener una decisión fundada.

Que, los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N.° 25.246 y sus modificatorias establecen que la persona humana que incumpla alguna de las obligaciones ante esta UIF será pasible de sanción de multa de PESOS DIEZ MIL

($10.000) a PESOS CIEN MIL ($100.000), en los casos en que no se pueda establecer el valor real de los bienes.

Que la finalidad esencial de las sanciones que aplica esta Unidad es la prevención y disuasión de conductas reprochables y que ello tiende a evitar la reiteración de los incumplimientos por parte de los sumariados.

Que, por todo ello, considero el monto de la sanción aconsejada razonable y proporcional al cargo atribuido.

Que las conclusiones a las que ha arribado la Dirección de Régimen Administrativo Sancionador se encuadran en el ejercicio de su competencia específica (Resoluciones UIF Nros. 111/2012 y 152/2016 y sus respectivas modificatorias).

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha emitido el dictamen correspondiente conforme lo establece el inciso d) del artículo 7° de la Ley N.° 19.549 y sus modificatorias.

Que el Consejo Asesor ha tomado la intervención que le compete conforme lo prevé el artículo 16 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

Que la presente Resolución se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, y los Decretos Nros. 290 del 27 de marzo de 2007 y sus modificatorios, y 834 del 6 de diciemt de 2021.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Declárese la responsabilidad del escribano Roberto Alejandro CORNET (CUIT N° 20-18090875-8), conforme a lo dispuesto por el inciso 12 del artículo 20 de la Ley N° 25.246, y sus modificatorias, por haberse acreditado el cargo de falta de registración ante la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA en tiempo oportuno, en infracción al artículo 2° de la Resolución UIF N° 50/2011 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 2°.- Impóngase en consecuencia a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente, una multa de PESOS SESENTA MIL ($60.000), al escribano allí citado, de acuerdo con lo expuesto en el Considerando de esta Resolución y a lo establecido en los incisos 1 y 3 del artículo 24 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese e intímese al sumariado a hacer efectivo el pago de la multa impuesta dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente Resolución, el que deberá materializarse mediante el Sistema de Recaudación de la Administración Pública -eRecauda- (https://erecauda.mecon.gov.ar). Asimismo, deberá acreditarse el pago en el expediente dentro del plazo de CINCO (5) días de haberse efectuado, en la sede de la UIF, sita en Av. de Mayo 757/761 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todo ello, bajo apercibimiento de iniciar la correspondiente ejecución.

ARTÍCULO 4°.- Hágase saber al sumariado que la presente Resolución agota la vía administrativa y que podrá recurrirse en forma directa en el plazo de TREINTA (30) días por ante la justicia en el fuero Contencioso Administrativo Federal, conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 25.246 y sus modificatorias y el artículo 25 del Decreto N° 290/2007, aplicándose en lo pertinente las disposiciones de la Ley N° 19.549.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Colegio de Escribanos de la Provincia de Santiago del Estero, de acuerdo con

lo establecido en los artículos 31 y 35 Resolución UIF N.° 111/2012, con copia certificada de la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, comuníquese, cumplido, archívese.

Digitally signed by OTERO Juan Carlos
Date: 2023.06.02 15:59:28 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

JUAN CARLOS OTERO
Presidente
Unidad de Información Financiera

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.06.02 15:59:33 -03:00

120

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Providencia

Número: PV-2023-64104210-APN-DD#UIF

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 5 de Junio de 2023

Referencia: EXPTE. UIF N° 1323/2017

A DIRECCIÓN RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

Vista la RESAP-2023-98-APN-UIF#MEC del día 02 de Junio de 2023, pasen las presentes a esa Dirección para la prosecución del trámite.

Sirva la presente de atenta nota de remisión.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.06.05 13:30:22 -03:00

Federico Freddi
Auxiliar administrativo
Dirección de Despacho
Unidad de Información Financiera

Recibido 5 de JUNIO de 2023
Dirección de Régimen Administrativo Sancionador
15

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2023.06.05 13:30:23 -03:00